



Columnas Estatales

29 octobre 2025



SE COMENTA

Que en el franco **combate** a uno de los principales generadores de **inestabilidad e inseguridad**, que es en lo que se han erigido los **pseudosindicatos**, sobre todo en la zona del **Valle de México**, las autoridades aún tienen varios flancos por atender, luego de haberles pegado en sus prácticas de **invasión de inmuebles**, **extorsiones** y, recientemente conocido, el **huachicoleo del agua**.

Y es que estas organizaciones, con **liderazgos definidos**, han metido sus tentáculos en gran parte de las **actividades sociales y económicas** de la entidad durante muchos años.

Que si bien están investigando, aún está **pendiente** que las **autoridades** concreten la **estrategia** con aspectos como sus **cuantiosos recursos** (cuyas fortunas bien podrían ser objeto de estudio de la **Unidad de Inteligencia Financiera**) y sobre todo sus **conexiones políticas**, pues desde **alcaldes** y más para arriba han cobijado sus cuestionables actividades desde hace décadas. No se explicaría su **crecimiento e impunidad** de otra manera.

Por cierto, para las conjeturas de qué tanto estaban metidos en un **negocio** fuera de la **ley**, queda el dato de que, a **cuatro días** del **operativo** y los **cateos**, solo han reclamado los presuntos propietarios de **11 de los 189** inmuebles asegurados.

Que sin embargo, en el entendido de que muchas personas **trabajan de buena fe** en labores de distribución de agua y tras la movilización de “piperos” con el **cierre carretero** en distintos puntos del **Estado de México**, la **gobernadora Delfina Gómez Álvarez** sostuvo que “no es una cacería”, reiterando que habrá reuniones **regionales** para tratar el tema directamente con los sectores **involucrados**.

Que en otros temas, el gremio **notarial mexiquense**, colegiado que encabeza **Humberto Benítez González**, celebró que ayer el **Diputado Javier Cruz** haya presentado en el **Parlamento Ciudadano Abierto** para el **Combate a la Corrupción y de Transparencia 2025** del **Congreso estatal** su propuesta para dar **apoyo técnico y financiero** en el combate a la **corrupción**. “Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción desde la **fe pública** y tejemos alianzas para garantizar nuestra debida diligencia”, señalaron. ■

LA MAQUINITA

Solución temporal o permanente

:::: El reciente aumento en el suministro de agua en Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, destacado por el presidente municipal **Pedro Rodríguez Villegas**, es un avance importante, pero aún insuficiente para regresar a la normalidad histórica. La situación refleja la fragilidad de la infraestructura y la dependencia casi total del Sistema Cutzamala, lo que evidencia la necesidad de estrategias más sostenibles y diversificadas para garantizar el abasto en el futuro.



Pedro Rodríguez.

Es positivo que las autoridades proyecten la perforación de nuevos pozos y promuevan la cultura del cuidado del agua, pero estos esfuerzos deben ir acompañados de una buena planificación.

Responsabilidad compartida

:::: El operativo de limpieza implementado en Toluca durante el fin de semana, coordinado por **Ricardo Moreno**, muestra un esfuerzo significativo para mantener la ciudad ordenada frente a la gran afluencia de eventos masivos. La recolección de toneladas de basura evidencia tanto la magnitud de las actividades como la necesidad de mantener operativos constantes que garanticen espacios públicos limpios y seguros para la ciudadanía. Sin embargo, más allá de la labor del personal de Servicios Públicos, estos datos reflejan la importancia de fomentar la responsabilidad ciudadana.



Ricardo Moreno.

Solidaridad activa

:::: La gobernadora **Delfina Gómez** ha demostrado que la solidaridad puede ser una política activa al encabezar el envío de ayuda humanitaria a Veracruz y coordinar el apoyo a Hidalgo. Acciones como estas muestran que la gestión pública no solo se trata de programas locales, sino también de responder a emergencias que afectan a otras regiones, fortaleciendo la unidad entre estados y promoviendo la colaboración entre instituciones y ciudadanía. Además, la participación del Poder Judicial y otras dependencias refleja que la ayuda efectiva requiere trabajo en equipo y compromiso de todos los sectores. El esfuerzo de **Delfina Gómez** y su administración no sólo atiende necesidades inmediatas, sino que también construye un ejemplo de responsabilidad social y corresponsabilidad, recordando que la ayuda humanitaria bien organizada puede generar confianza en la gestión pública.



Delfina Gómez Álvarez.

EL INSURGENTE

Vigilancia integral

:::: **Cristóbal Castañeda** demuestra que la seguridad pública puede ser preventiva y estratégica al coordinar un operativo masivo durante las celebraciones del Día de Muertos. La presencia de miles de efectivos en panteones, zonas turísticas y centros comerciales busca proteger a la ciudadanía sin descuidar la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, lo que refuerza la confianza en la gestión de la seguridad. Además, la disminución de delitos como la extorsión y la atención a irregularidades en el suministro de agua reflejan que las acciones de seguridad no sólo deben ser visibles, sino también efectivas y basadas en investigación. La labor de Castañeda evidencia que un enfoque integral, transparente y legalmente sustentado es clave para garantizar tanto la protección de las personas como la justicia en la operación del estado.



ESPECIAL

Cristóbal Castañeda.

Regulación y cumplimiento

:::: La reciente Operación Caudal demuestra que las autoridades del Estado de México están tomando medidas firmes contra la venta ilegal de agua, un recurso esencial para la vida. El cierre de pozos, tomas clandestinas y la incautación de pipas no sólo busca sancionar a quienes lucran con este recurso, sino también proteger a la ciudadanía de tarifas abusivas y garantizar que el suministro llegue a quienes realmente lo necesitan. Es un recordatorio de que la regulación y el cumplimiento de la ley son fundamentales para mantener la equidad en el acceso al agua. Sin embargo, este tipo de acciones también evidencia la necesidad de soluciones estructurales a largo plazo. El hecho de que exista un mercado negro de agua refleja que todavía hay zonas donde el suministro es insuficiente o irregular. Por ello es indispensable fortalecer la infraestructura hidráulica.

Impulsan regulación a estacionamientos

:::: La propuesta de **Daniel Serrano** para regular los seguros de los estacionamientos en plazas comerciales es un paso positivo para proteger a los usuarios frente a robos y daños a sus vehículos; aunque la seguridad dentro de estos espacios es responsabilidad de los privados, la intervención del gobierno municipal garantiza que cumplan con condiciones mínimas de protección, fortaleciendo la confianza de los consumidores en Cuautitlán Izcalli. La disminución del 30% en los casos de robo de autopartes refleja avances en la seguridad, pero es necesario que esta medida se complemente con campañas de prevención para los usuarios y un refuerzo en la vigilancia de las plazas, logrando así que estos espacios sean más seguros y confiables para todos.



ESPECIAL

Daniel Serrano.

EN LOS PASILLOS

RARÍSIMO

Comentan que una vez más el “proyecto ecológico” del **Lago de Texcoco**, vuelve a quedar bajo la sombra del **despilfarro** y la **corrupción**, pues resulta, la Auditoría Superior de la Federación detectó **pagos** por obras que **no** existen, **sobrepagos** y deficiencias en la construcción que la Comisión Nacional del Agua no logró **justificar**.

ATINADOS

Aseguran que estrellita en la frente para la administración de **Atizapán de Zaragoza** por destinar 47 millones de pesos para que más de 15 mil **estudiantes** de este municipio continúen con sus estudios. Por cierto, esta **inversión** es **histórica** en la demarcación, pues no se había alcanzado la **cifra** mencionada en ninguna **administración**.

EMPRENEDORES

Dicen que Huixquilucan se ha convertido en un lugar importante para la **inversión de alto nivel**, de ahí que en breve se iniciará la **construcción** de un **complejo** residencial, en donde se espera la creación de centenas de **empleos fijos** y temporales. Por supuesto, en la decisión de invertir han pesado **factores** como la **gobernabilidad**, la seguridad y políticas de **emprendimiento**.

OPORTUNIDAD

Cuentan que con el programa **Borrón y Cuenta Nueva**, el gobierno de **Cuautitlán Izcalli** pretende **motivar** a ciudadanos y dueños de **negocios particulares** para ponerse al corriente en sus **pagos** domésticos y comerciales. La iniciativa tiene como objetivo **fortalecer** las **finanzas** municipales y ofrecer a **usuarios** la **oportunidad** de ponerse al corriente.

columnalospasillos@gmail.com



Dobleces

Israel Mendoza Pérez
@imendozape

Un dirigente migajero

Aunque se cristalizó el bloque de PRD's locales para amalgamar una fuerza nacional, a mediano plazo, la facción de Omar Ortega, dirigente estatal y coordinador parlamentario en el Estado de México, maneja el último reducto de influencia del exdirigente Jesús Zambrano, con la esperanza de ofrecer el capital político a una fuerza partidista de mayor peso. Craso error. Seguir a Zambrano es enfilarse al desolladero.

Omar Ortega se encuentra atrapado en la arrogancia en la que lo envolvió Zambrano y la corriente ADN de Héctor Bautista que busca vivir de mendrugos políticos. Le dieron poder sobre un ladrillo. Sin embargo, su influencia actual es nimia en la entidad. En cambio, la reagrupación del PRD tiene un avance de 25 por ciento a nivel nacional, su presencia en ocho estados, se traduce en una presencia creciente en comparación con lo que representa Zambrano en la actualidad. Nada.

El bloque nacional de partidos locales del PRD, integrado por las dirigencias de la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca comienza a construir una plataforma electoral con los objetivos de recuperar gobiernos y fortalecer al PRD como una fuerza política nacional. Por lo que se advierte que rumbo a 2027, el bloque perredista tenga una presencia en la lucha electoral propia sin dependencia de una alianza.

Eso es lo que desprecia Omar Ortega. Su añoran-

za de las pasadas alianzas y la voracidad política de Zambrano lo tienen obnubilado. El PRD estatal en el Estado de México, se encuentra atrapado entre las glorias del pasado y el presente de la arrogancia.

De acuerdo con los recientes lineamientos del bloque, el comité promotor tendrá como papel convocar a toda la militancia y a los movimientos de izquierda del país, para fomentar el reencuentro y el fortalecimiento de la unidad de la izquierda progresista en el país.

Y es que este bloque nace sin los caudillos que medraron con las siglas del PRD por más de tres décadas. Los últimos años en manos de Jesús Zambrano, el partido del sol azteca se convirtió en una fuerza testimonial en la que su narrativa se sustentaba en lo cualitativo de la militancia y no en lo cuantitativo. En ese fraseo, el PRD perdió espacios, militantes y los recursos se manejaron para ir en una alianza en la que Zambrano convirtió el legado de la izquierda en una fuerza migajera.

A ese camino se enfila el PRD de Omar Ortega. Su negativa de formar parte del bloque perredista es por una obediencia a ciegas al exdirigente Zambrano y no a los intereses de los simpatizantes que aún creen en las siglas del partido negroamarela.

Dueño de una porción mínima del perredismo, Ortega carece de la fuerza para reagrupar a la militancia. Se quedó con todo lo que un partido tiene. Eso ambicionaba. Ahora, solo administra la pobreza política.



Felipe González

Escozor de inseguridad

La semana pasada se presentó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al tercer trimestre de 2025. La medición indica que el nivel de percepción de inseguridad en el caso del estado de México, y las ciudades que revisa la encuesta, ni baja ni sube, sino todo lo contrario. El mexiquense de a pie cree que vivir en su ciudad es inseguro.

El Instituto Nacional Estadística y Geografía refiere prácticamente una tasa de percepción de inseguridad del 80 por ciento. Y eso significa que en los últimos dos años, los correspondientes a la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la percepción de inseguridad no ha variado sensiblemente.

De hecho, el promedio de percepción de inseguridad en diciembre de 2023 de las ocho ciudades mexiquenses que mide la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana fue de 75.36 por ciento. Al mes de septiembre de 2025, el mismo promedio es de 74.58 por ciento.

Si la aritmética sigue funcionando como en la época de Pitágoras, la diferencia a la baja es de 0.78 por ciento. Menos de un punto porcentual en los dos últimos años. Una imperceptible disminución que estadísticamente es irrelevante y que en la práctica es intrascendente. Y eso, a pesar de que en los últimos dos años periódicamente se asegura que hay una disminución en la comisión de los llamados delitos de alto impacto, como el homicidio, el feminicidio, el secuestro, la extorsión, la violencia sexual y los robos violentos —que generan una gran percepción de inseguridad—.

Todos sabemos que se han llevado a cabo diversos operativos, mediáticos y espectaculares, en contra de este tipo de delitos. Operaciones como Enjambre —que detuvo y consignó a funcionarios y ex jefes policiacos vinculados con organizaciones criminales—, Liberación —para dismantelar redes criminales de extorsión, secuestro y delitos contra la salud—, Bastión, Enjambre, Atarraya y Fortaleza,

Si la aritmética sigue funcionando como en la época de Pitágoras, la diferencia a la baja es de 0.78 por ciento

además de la reciente Caudal, han resultado en despliegues masivos de fuerzas de seguridad, colaboración de fuerzas del orden estatales, federales y municipales. Una cosa así de la que todos hemos hablado. Pero en los hechos, su calado ha sido menor.

Dicho en otras palabras, pese al impacto de estos operativos, el ciudadano de a pie sigue con esa sensación de escozor de la inseguridad.

Por si eso fuera poco, para los especialistas en los temas de seguridad la preocupación radica en que las decisiones de las mesas para la paz se toman a partir de los delitos que se denuncian, que son solamente 10 de cada 100.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana media al inicio de la pasada administración estatal a solamente tres ciudades. El promedio de percepción de inseguridad en diciembre de 2017 fue de 85 por ciento. En seis años —achá todo se mide en sexenios— la estadística mostró una disminución de 10 puntos porcentuales, y la cifra no se ha movido en los últimos 24 meses. Y las expectativas no son halagüeñas: 57.9 por ciento de quienes respondieron la encuesta piensan que seguirá igual o empeorará.

X: @FelipeGlz

LA EDITORIAL



Orden y justicia en cada gota

La “Operación Caudal” emprendida por el gobierno de Delfina Gómez no busca confrontar, sino poner orden en un ámbito donde por años imperó la corrupción y el acaparamiento. La gobernadora ha sido clara: el agua es un bien común y quien actúe conforme a la ley no tiene por qué preocuparse. Con una política de puertas abiertas, su administración escucha a los municipios y operadores, pero aplica la ley con firmeza para garantizar que cada litro se distribuya de manera justa y sostenible.

El respaldo de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional refuerza la seriedad del operativo y su carácter institucional. Regular no es castigar, sino asegurar que el agua llegue a quienes más la necesitan. En ese equilibrio entre diálogo y autoridad se juega el futuro hídrico del Estado de México: una gestión transparente, equitativa y sustentable que prioriza el bienestar colectivo sobre cualquier interés particular.





El pico del pollo

Alfredo Albiter Sánchez

alfredo.albiter@capitalmedia.mx

El negocio de la sed

La "Operación Caudal" no sólo fue un operativo más, abrió puertas en donde se nos dejó ver una cara de la miseria humana y además reveló cómo en el Estado de México, unos cuantos se habían convertido en los todopoderosos, lucrando con la necesidad de la gente, de la población; un negocio a costa de la urgencia por el agua. Durante años, el transporte y la distribución del agua potable estuvieron en manos de un solo grupo, acaparando la venta, controlando rutas y manipulando el abasto del vital líquido. Mientras ellos se enriquecían, comunidades enteras padecían escasez o pagaban sobreprecios -bastante exagerados- por un servicio que debía ser público y además a precios justos... Así entonces, es necesario entender lo que se destapó con el operativo conjunto, no fue un conflicto administrativo, sino un sistema paralelo de lucro, cuya operación se realizaba con tomas clandestinas, pipas irregulares y centros de acopio ilegales... El resultado ahí está y los fríos números reflejan la realidad del tema: 189 inmuebles asegurados en 48 municipios, por cierto, cada uno con al menos una carpeta de investigación abierta. Lo

que permite asegurar quienes resulten responsables ¡irán a prisión!... Y mira lectora, lector queridos cómo están las cosas que aquellos, mismos quienes hoy se dicen "afectados", durante años fueron quienes se beneficiaron del desorden. Vayamos un poco más allá, las pipas sin registro, los pozos ilegales y los cobros a discreción no eran, ni fueron actos de supervivencia, por el contrario, se convirtieron en un gran esquema de corrupción y saqueo del recurso más esencial. Cuando el agua se convierte en mercancía, el pueblo paga con su dignidad. Por ello y otras cosas más relacionadas con temas de justicia y legalidad la "Operación Caudal" no atenta contra nadie: eso sí, corrige una distorsión mediante la cual por años drenó recursos, confianza y equidad, quizás por compromisos no escritos, quizás por conveniencia, quizás por complicidad o todas juntas, pero las autoridades evadieron enfrentar el caso y se fueron por la fácil dejando correr lo que a todas luces violentaba la ley... El argumento del pequeño trabajador que "sólo llevaba agua" se cae frente a la magnitud del daño. Si el servicio era legal, ¿por qué nadie se ha presen-

tado a acreditar su propiedad? Hasta el 27 de octubre, apenas once personas habían acudido al Ministerio Público para manifestar interés por alguno de los 189 inmuebles asegurados. La cifra habla por sí sola: el resto no tiene cómo justificar lo que hacía. Este no es un ataque al trabajo honesto, es una defensa del derecho ciudadano al agua limpia, accesible y legal. Ya basta de normalizar y justificar con golpes de ánimo o falso romanticismo aquello que nos cuesta a todos, nos afecta y se mueve en la ilegalidad.

LA RABADILLA DEL POLLO

Pollos en el tejado me dicen, se acercan los días temidos por algunos y algunas presidentas municipales, cuyo trabajo al frente de sus administraciones son poco más que opacas. Llegó el momento de rendir cuentas, pero de las reales, no de las imaginarias, esas que escuchamos en los famosos informes... Aunque el INEGI diga lo contrario, por hoy, cierro pico. Acompañame de 13:00 a 14:00 hrs en Capital Noticias en el 89.3 en Toluca y 99.5 de FM en Ixtapan de la Sal, de lunes a viernes. Shalom.



Los poderes fácticos andan sueltos

El agua, ese recurso que debería unirnos, hoy es motivo de chantaje, de presión, de intereses oscuros. Lo que vimos el lunes en el Estado de México no fue una protesta legítima de ciudadanos desesperados por la falta del líquido: fue una demostración de fuerza de quienes han hecho del agua un negocio y de la necesidad un botín. Los llamados “huachicoleros del agua”, los piperos que se reparten territorios y contratos, y aquellos que desde los espacios de poder medran con la angustia de las comunidades, decidieron paralizar al estado con bloqueos en las principales vialidades. Fue un mensaje directo “no nos toquen el negocio”.

Durante años, este entramado de intereses ha funcionado como una red silenciosa pero poderosa. Piperos que controlan zonas completas, líderes que cobran por surtir lo que debería llegar por tubería, funcionarios coludidos que otorgan permisos, contratos o “protección”. El agua se convirtió en una mercancía, y los que la controlan, en un poder paralelo. Cuando el gobierno estatal anunció que investigaría irregularidades y buscaría ordenar la distribución, los beneficiarios del caos reaccionaron con furia.

Funcionarios municipales y estatales que tienen negocio de venta de agua, mientras la llave institucional se cierra como medida de ahorro o política pública. Por ahí podríamos empezar la investigación.

El lunes lo demostraron, concesionarios y operadores lograron colapsar carreteras, autopistas y avenidas estratégicas del Valle de México. Miles de ciudadanos quedaron atrapados durante horas, sin poder ir a trabajar, estudiar o regresar a casa. Las pérdidas económicas fueron enormes, pero el daño más grande fue simbólico: por unas horas, los grupos del agua demostraron que pueden someter al estado.

Y, mientras tanto, el gobierno tardó en reaccionar. No fue sino hasta anoche cuando la administración estatal emitió un comunicado anunciando investigaciones, medidas de control y posibles sanciones. Pero la tardanza dejó un sabor amargo. ¿Por qué siempre parece que las autoridades responden después, cuando el problema ya se desbordó?

El trasfondo es evidente, el Estado de México vive una transformación profunda en su política del agua. La promesa de acabar con la corrupción en los organismos operadores, transparentar la distribución y garantizar el acceso equitativo no solo implica obras o planes técnicos. Implica romper con estructuras mafiosas. Y esas estructuras no se rinden fácilmente.

Lo que hoy ocurre con el agua es el espejo de lo que pasa con otros servicios públicos capturados por intereses privados: transporte, basura, construcción. Durante décadas se permitió que redes de complicidad hicieran de cada necesidad humana un negocio rentable. Y cuando un gobierno intenta poner orden, esas redes se defienden como lo que son: grupos de poder.

No se trata de demonizar a todos los que trabajan con pipas—muchos son honestos y cubren vacíos que el sistema no resuelve—, sino de distinguir entre quien ofrece un servicio necesario y quien lucra con la miseria o manipula políticamente la sed de los pueblos.

No se puede permitir que los intereses particulares chantajeen a millones de ciudadanos. El agua no puede seguir siendo rehén de los poderosos ni moneda de cambio en tiempos de tensión política.

Las investigaciones anunciadas deben ser reales, no un simple anuncio de contención. Hay que llegar hasta el fondo, aunque duela, aunque toque a personajes con nombre y apellido dentro y fuera del gobierno. Porque si el Estado se doblega ante los huachicoleros del agua, si acepta que la presión callejera define la política hídrica, entonces habrá perdido mucho más que autoridad: habrá perdido el derecho a garantizar un bien público esencial.

El agua no debe ser negocio. No debe ser poder. Debe ser vida. Y defenderla, aunque incomode, es hoy una prueba de gobierno.



MIGUEL ÁNGEL RAMOS

MexiquenSer

Agua: la profecía de Arturo Montiel

Hace dos décadas, el Estado de México vivió una "guerra por el agua" con la Ciudad de México, cuando el entonces gobernador Arturo Montiel demandó en una corte internacional a la capital, entonces gobernada por Andrés Manuel López Obrador, para que reparara los daños causados por la sobreexplotación del vital líquido.

En una reciente entrevista para el periodista José Alam Chávez, el exmandatario mexiquense narra

cómo se vivió el conflicto, en el que las autoridades del Edomex restringieron el agua en bloque que se surte desde el Sistema Cutzamala para obligar a que los capitalinos cumplieran con sus pagos. Al final, dice ahí, tuvo que intervenir el presidente Vicente Fox para apoyar al entonces Distrito Federal a saldar su deuda.

Ya en aquel tiempo, el mismo Montiel advertía en diversos foros que "las guerras del futuro serían por el agua". Como prece-

dente, en 1995, el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, había realizado la misma sentencia.

Hoy, en el Estado de México, esa frase suena más actual que nunca. El llamado Operativo Caudal, desplegado en los últimos días por el gobierno estatal, destapa una realidad que se sabía, pero que pocos querían reconocer: el huachicoleo del agua se ha convertido en un negocio tan lucrativo como el del combustible.

Mientras el Sistema Cutzamala alcanza más del 90 por ciento de su capacidad, tras años de sequía y crisis hídrica, salen a la luz los mecanismos ilegales que durante años drenaron el recurso: tomas clandestinas, desvíos de pozos y venta irregular de pipas, muchas veces operadas con protección política o bajo la mirada indiferente de autoridades municipales.

Lo que debía ser un bien público terminó convertido en una mercancía para unos cuantos. La nece-

sidad humana, explotada.

Las causas son múltiples. Por un lado, el crecimiento descontrolado de la mancha urbana en el Valle de México, donde cada nuevo fraccionamiento exige agua aunque no haya fuentes suficientes. Por otro, la corrupción institucionalizada y la desigualdad en el acceso al líquido.

Desde 2022, el Estado de México tipificó el robo, sustracción y comercialización ilícita del agua potable como delito. Hasta ocho años de prisión es lo que considera el Código Penal mexiquense, y hasta nueve años si quien incurre en ello es servidor público. Sin embargo, el reto es hacer efectiva la ley.

El Operativo Caudal llega en un momento simbólico: cuando el

agua vuelve a fluir en los embalses pero también cuando la disputa por su control se intensifica. No es casualidad que el Estado de México, territorio conurbado, industria y electoralmente estratégico, sea epicentro de esta batalla. Es aquí donde se cruzan intereses de todo tipo. Ahí está la información de la Fiscalía mexiquense señalando a sindicatos y asociaciones involucradas en este delito. Falta conocer las redes de complicidad.

La guerra por el agua no es una metáfora. Ya está aquí, en el Valle de México. El desafío no es sólo castigar a los huachicoleros de agua, sino reconstruir la confianza en la gestión del recurso, ante de que la profecía de Montiel deje de ser advertencia. ●

El Operativo Caudal llega en un momento simbólico: cuando el agua vuelve a fluir en los embalses, pero también cuando la disputa por su control se intensifica.

ideas & voces

editorial

LAS CALLES HABLAN. A VECES LO HACEN CON BACHES, CON EL POLVO QUE se levanta de los caminos olvidados o con los charcos que se forman tras cada lluvia. Son el reflejo más visible del abandono municipal, del desequilibrio presupuestal que asfixia a los ayuntamientos del Estado de México y de todo el país. Porque sí, los gobiernos municipales son los más cercanos a la gente, pero también los más pobres.

A diario los ciudadanos reclaman por lo que ven y viven: calles rotas, luminarias fundidas, banquetas destruidas, drenajes colapsados. Son

los problemas más elementales, los que tocan la vida cotidiana. Y sin embargo, los municipios, responsables directos de atenderlos, carecen de recursos suficientes para hacerlo. Las participaciones federales llegan tarde o incompletas, los ingresos propios son limitados y los gastos obligatorios crecen cada año.

¿Cómo puede un gobierno local planear obras si apenas tiene para pagar la nómina y los servicios básicos? ¿Cómo puede responder a las demandas de la gente si depende casi por completo de transferencias estatales y federales que se reparten con criterios políticos y no con base en las necesidades reales?

Es urgente repensar el federalismo mexicano desde abajo. Los municipios no pueden seguir siendo el eslabón más débil del sistema, los que dan la cara ante los ciudadanos pero no tienen herramientas para actuar. Si queremos ciudades limpias, seguras y transitables, necesitamos gobiernos municipales fuertes, con autonomía financiera y con capacidad de decisión.

No se trata de más burocracia, sino de justicia. Cada peso invertido en pavimentar una calle o tapar un bache mejora la vida de cientos de personas. Pero sin presupuesto, todo queda en promesas. El deterioro urbano no es culpa de los alcaldes solamente, sino de un sistema que concentra los recursos arriba y deja abajo la responsabilidad.

Fortalecer a los municipios es fortalecer la democracia. Porque el gobierno más cercano a la gente no puede seguir siendo el más olvidado.



¿Vendrá una reforma universitaria antineoliberal?

Un motivo es una causa o razón que se mueve para que algo suceda. Entre las ocho temáticas puestas a consideración de la comunidad universitaria, se busca reformar un corpus jurídico complejo. A partir de las modificaciones a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (45 artículos, más 19 transitorios) y del Estatuto Universitario (156 artículos, más 24 transitorios), desgranará el análisis de una

montaña de artículos que forman parte de diversos reglamentos institucionales, mismos que requerirán de un arduo y escrupuloso trabajo profesional.

Quiero proponer un motivo fundamental y de fondo, ahora que la reforma auriverde se ha puesto en marcha. La consulta cierra el 31 de octubre; el trabajo que comienza será largo. Antes, la propuesta deberá aprobarse internamente por todos y cada uno de los órganos de

representación y de decisión que yacen en cada espacio educativo o administrativo, hasta que finalmente emane del H. Consejo Universitario. Luego, deberá enviarse a la titular del Poder Ejecutivo, para su ulterior ingreso al Poder Legislativo local.

En la mesa 2. Derechos Universitarios e inclusión, una de las preguntas detonadoras dice lo siguiente: ¿Qué derechos del alumnado, personal académico y personal administrativo deben consolidarse o adicionarse en la Ley?

Respecto al personal académico y administrativo, dado que el modelo neoliberal es cosa del pasado, se debe consolidar el derecho a tener un salario digno, suficiente y que corresponda con cada puesto y categoría obtenida. Para ello, como una de las posibles medidas, bastaría con integrar a nuestro salario mensual aquellas Unidades de Medida y Actualización (UMAS) que año con año o bianualmente, proceden de los programas de estimu-

los al desempeño.

En realidad, dichas maniobras económicas se pusieron en marcha en 1996, cuando el execrable modelo neoliberal zedillista continuó manteniendo a raya los salarios base que teníamos tanto los docentes como el personal administrativo de las universidades públicas. Mediante el derecho a un salario digno, el segundo piso de la cuarta transformación daría muestras de que efectivamente se ha extirpado del país el perverso modelo neoliberal.

Como se recordará, los salarios base comenzaron a mermar desde los gobiernos de Miguel de la Madrid (1982-1988) y continuó Sali-

nas de Gortari (1988-1994). En esa época, se abrió la puerta a dicho modelo. Así, en todas las Universidades Públicas Estatales (UPES), incluida la nuestra, desde hace casi 30 años, se hacen esfuerzos agotadores para tratar de disfrazar u ocultar los bajos salarios que nos pagan, mediante el otorgamiento de "estímulos" de corte productivista; una estrategia neoliberal al desnudo.

Ahora que la LXII Legislatura de la entidad tiene una fuerza casi absoluta que emana de Morena, más sus aliados, tendremos una reforma universitaria de corte antineoliberal. ¡Seguro, pondrán la muestra! ●

En realidad, dichas maniobras económicas se pusieron en marcha en 1996, cuando el execrable modelo neoliberal zedillista continuó manteniendo a raya los salarios.